

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

ACUERDO 043/CQD/28-07-2021

QUE EMITE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS EN EL EXPEDIENTE IEPC/CCE/PES/088/2021, FORMADO CON MOTIVO DE LA QUEJA Y/O DENUNCIA PLANTEADA POR LA C. YASMÍN ARRIAGA TORRES, EN CONTRA DEL C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUEVAS, EDITOR Y DIRECTOR DEL SEMANARIO *¿NO QUÉ NO? COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA*, POR ACTOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO.

R E S U L T A N D O

I. INICIO DE PROCESO ELECTORAL. El Consejo General de este Instituto, decretó el inicio del proceso electoral 2020-2021, el nueve de septiembre de dos mil veinte.

II. PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA DEL EXPEDIENTE IEPC/CCE/PES/033/2021. El siete de mayo de la presente anualidad, en la oficialía de partes de este Instituto Electoral, la C. Yasmín Arriaga Torres, presentó escrito de queja y/o denuncia en contra de la página digital y/o responsable del contenido digital “el Ring de Guerrero”; el C. José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*; y el C. Marco Antonio Leyva Mena; por presuntos actos que podrían configurar Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, denuncia que quedo radicada bajo el número de expediente IEPC/CCE/PES/033/2021.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

III. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS DEL EXPEDIENTE IEPC/CCE/PES/033/2021. El quince de junio de la presente anualidad una vez desahogadas las etapas del procedimiento se llevó acabo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del expediente IEPC/CCE/PES/033/2021, en la cual se constató la inasistencia de la denunciante, así como la asistencia del denunciado José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, y una vez practicada la referida diligencia, se ordenó la remisión del citado expediente al Tribunal Electoral del Estado a efecto de que dictara la resolución que en derecho correspondiera.

IV. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. El diecinueve de junio de la presente anualidad, el Tribunal Electoral del Estado, dictó sentencia en el expediente IEPC/CCE/PES/033/2021, en la cual determinó la inexistencia de la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género atribuida a José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*; y a Marco Antonio Leyva Mena.

V. VISTA DE LA SALA REGIONAL CDMX DEL TEPJF. Inconforme con la sentencia local, el veinticuatro de junio la parte denunciante interpuso juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, con el que se formó el expediente SCM-JDC-1686/2021, del índice de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

Asimismo, en el referido expediente, mediante acuerdo plenario de uno de julio de la presente anualidad, el Pleno de la Sala Regional Ciudad de México, determinó escindir el escrito de demanda relativo al juicio para la protección de los

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

derechos político electorales, al advertir que en la referida demanda, la parte actora realizó una petición especial en el sentido de que se dictaran las medidas de protección en su favor, que garantizaran sus derechos humanos, a fin de salvaguardar su integridad pues a su consideración seguía siendo motivo de denostaciones diversas a las que dieron origen al procedimiento especial sancionador IEPC/CCE/PES/033/2021.

En particular, señaló que el quince de junio, ¿el director del “No qué no?”, José Luis González Cuevas, transmitió a través de la plataforma de Facebook una comunicación en donde realizó señalamientos contra ella.

Por lo que se vinculó a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que conociera la denuncia presentada por la parte actora, es decir, de los hechos que mencionó en el apartado de petición especial el escrito de demanda relativo al juicio para la protección de los derechos político electorales, a través del procedimiento correspondiente, y así como el pronunciamiento correspondiente respecto de la solicitud de medidas cautelares que realizó la denunciante en el referido escrito, para tal efecto remitió copia del escrito de demanda.

VI. RADICACIÓN Y MEDIDAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN. El tres de julio de la presente anualidad se acordó la recepción del oficio SCM-SGA-OA2102/2021, mediante el cual se notificó el acuerdo plenario de uno de julio de la presente anualidad, dictado por el Pleno de la Sala Regional Ciudad de México, así como el escrito de demanda relativo al juicio para la protección de los derechos político electorales, firmado por Yasmin Arriaga Torres, con el cual se ordenó radicar y formar el expediente IEPC/CCE/PES/088/2021, y entre otras cosas, se requirió a la denunciante y se dictaron medidas preliminares de investigación.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

VII. El veintisiete de julio de la presente anualidad, al advertir que no existían diligencias preliminares de investigación por desahogar, y al considerar que en autos obraban elementos suficientes para continuar con el cauce legal del procedimiento y al no desprenderse causales notorias o evidentes de improcedencia, se **admitió** a trámite la queja y/o denuncia planteada y se ordenó el emplazamiento de José Luis González Cuevas en su carácter de editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, por presuntos actos que podrían configurar Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, asimismo, se fijó fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

VIII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Mediante diverso veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno auxiliar del expediente IEPC/CCE/PES/088/2021, se ordenó la elaboración del proyecto de acuerdo de medidas cautelares, así como su posterior remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que resultara conducente.

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es competente para resolver sobre la procedencia o improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por la denunciante, de conformidad con lo estatuido en los artículos 438 Bis, 441 segundo párrafo y 443 Bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 75, 79 y 122 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, los cuales esencialmente facultan a la aludida Comisión para dictar medidas

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

cautelares que permitan lograr el cese de los actos o hechos que puedan constituir una infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o bien, evitar que se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales y legales de la materia.

En el caso, la competencia de esta Comisión se actualiza, porque las medidas cautelares se solicitan con base en posibles actos que pudieran configurar violencia política en razón de género.

II. HECHOS DENUNCIADOS Y MEDIOS DE PRUEBA. Como se ha señalado previamente, la promovente denunció medularmente la existencia de presuntos actos que podrían configurar violencia política en razón de género, basados en publicaciones de la red social Facebook, en las cuales hacen actos de calumnia, difamación, discriminación y estereotipos de género que afectan a su parecer su persona y su familia.

La denunciante ofreció como pruebas documentales públicas, la de tecnología, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que en obvio de mayores repeticiones, se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen en todas y cada una de sus partes y que ahora forman parte del presente acuerdo.

Medios de prueba recabados por la autoridad instructora:

1. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en el Acta Circunstanciada 114, con número de expediente IEPC/GRO/SE/OE/114/2021, mediante la cual, el

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Jefe de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto realizó la inspección del link <https://www.facebook.com/noquenoguerrero/videos/242289184371340/>.

2. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en la copia simple de la carpeta de investigación FG/CI/014/2021, radicada en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Guerrero.
3. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en el Acta Circunstanciada 117, con número de expediente IEPC/GRO/SE/OE/117/2021, mediante la cual, el Jefe de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto realizó la inspección de los links señalados por la quejosa en su escrito recibido el nueve de julio del año en curso, los cuales en obvio de mayores repeticiones, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen en todas y cada una de sus partes y que ahora forman parte del presente acuerdo.
4. **LAS DOCUMENTALES PRIVADAS.** Consistentes en las documentales recibidas mediante acuerdo de veintidós de julio de la presente anualidad, con las cuales de José Luis González Cuevas en su carácter de editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, acredita su carácter de periodista, mismas que en obvio de mayores repeticiones, se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen en todas y cada una de sus partes y que ahora forman parte del presente acuerdo.

III. CUESTIÓN PREVIA. Previamente a estudiar la procedencia de las medidas de protección solicitadas por la quejosa, es conveniente destacar que, para revisar este asunto, esta Comisión de Quejas y Denuncias lo hará

con perspectiva de género, dado que la actora señala que se cometió Violencia Política por Razón de Género en su contra¹.

La perspectiva de género es la metodología y mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres.

Juzgar con esta perspectiva implica reconocer la situación de desventaja particular en la cual históricamente se han encontrado las mujeres² -aunque no necesariamente está presente en todos los casos-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo³.

Así, la perspectiva de género obliga a las personas juzgadoras y a las autoridades administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales a incorporar en los procesos administrativos o jurisdiccionales un análisis de

¹ Esto, atendiendo a la tesis aislada 1a. CLX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro **DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015 [dos mil quince], tomo I, página 431).

² La perspectiva de género, como método analítico, debe aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres"; lo que fue establecido en la tesis 1a. LXXIX/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro **IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, febrero de 2015 [dos mil quince], página 1397).

³ De acuerdo a la tesis aislada 1a. XXVII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte con el rubro **JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo de 2017 [dos mil diecisiete], tomo I, página 443).

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

los posibles sesgos de desequilibrio que, de manera implícita o explícita, puedan estar contenidos en la ley o en el acto impugnado⁴.

El Protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad⁵ de la SCJN, es un instrumento que permite identificar y evaluar las circunstancias estructurales que perpetúan las violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexo-genérica de las personas.

Además, señala que juzgar con perspectiva de género implica tener cuidado especial al estudiar los “tratamientos jurídicos diferenciados” en un conflicto, pues es necesario determinar si tal diferencia es objetiva y razonable o si, por el contrario, es injustificada e implica una vulneración a los derechos de alguna persona por razón de género.

Para ello, propone estudiar si dicho trato diferenciado **(i)** implica la existencia subyacente de algún rol o estereotipo de género, **(ii)** encuadra en alguna categoría sospechosa, **(iii)** tiene por objeto o resultado, el impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, ejercicio o goce -en condiciones de igualdad- de los derechos humanos.

La aplicación de dicha metodología en un caso concreto según el Protocolo SCJN, sucede en diversas fases del proceso:

⁴ Así fue establecido por la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JDC-1619/2016.

⁵ Publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2015 (dos mil quince) y consultable en: <https://www.scjn.gob.mx/registro/formulario/protocolo-para-juzgar-con-perspe>

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

- **De manera previa o inicial:** es necesaria su aplicación para estudiar si es necesario otorgar medidas de protección y la admisibilidad del asunto.
- **En el estudio:** impacta el análisis de los hechos, la materia probatoria y la determinación del derecho aplicable.
- **En la resolución:** implica una argumentación jurídica especial y de ser procedente, la reparación del daño.

Así, por lo que se refiere a la fase previa o inicial, cuando una autoridad tenga conocimiento de hechos de peligro en la integridad y vida de una víctima, se deben adoptar medidas necesarias para evitar alguna lesión o daño.⁶

En ese sentido, y de un análisis integral a la denuncia planteada se advierte que, a consideración de la denunciante, el acto que constituye violencia política en razón de género, son las manifestaciones vertidas el quince de abril de la presente anualidad, por el C. José Luis González Cuevas, editor y director del semanario ¿No qué no?, comunicación estratégica, en la transmisión de Facebook realizada desde la plataforma del referido medio de comunicación, alojada en el link <https://www.facebook.com/noquenoguerrero/videos/242289184371340/>.

IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES.

⁶ Artículo 40 de la Ley General de Víctimas.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Relatado lo anterior, en específico los hechos narrados por la quejosa en sus escritos que obran en autos, permite vislumbrar de manera preliminar las siguientes conclusiones preliminares:

- La candidatura de la ciudadana Yasmin Arriaga Torres, al cargo de propietaria a la Segunda Sindicatura del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por el partido político MORENA, fue aprobado mediante acuerdo 135/SE/23-04-2021, emitido por el Consejo General de este Instituto.
- En el Acta Circunstanciada 114, con número de expediente IEPC/GRO/SE/OE/114/2021 se hizo constar la existencia y contenido del link de internet <https://www.facebook.com/noquenoguerrero/videos/242289184371340/>.
- Que de acuerdo a las constancias recibidas mediante acuerdo veintidós de julio de la presente anualidad, José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, tiene el carácter de periodista.

Ahora bien, conviene destacar el acta circunstanciada 114, en la que, en lo que interesa, se constató lo siguiente:

"Que tal muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta plataforma, informarles que estamos aquí en las oficinas del Instituto de Participación Ciudadana del estado de Guerrero en dónde el director del semanario ¿ No qué no? Comunicación estratégica, José Luis Ramírez Mendoza pues vino a contestar una demanda por violencia de género que interpuso la actual sindica electa Yasmín Arriaga y también la esposa del actual alcalde Antonio Gaspar Beltrán en estos momentos pues se

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

están desahogando aquí este asunto legal, se están presentando las pruebas, las evidencias de este tema que vamos a estar transmitiendo parte de lo que se vive aquí en las oficinas del Instituto Estatal de Participación Ciudadana, cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de aquí de Guerrero hace unos días emitió una resolución en donde ustedes recordarán que había sido denunciado, por el periodista José Luis González Cuevas eh por este tema de extorsión, por un tema dónde había dicho el alcalde que estaba queriendo extorsionar y sin presentar evidencias pues acuso al periodista José Luis González Cuevas en estos momentos ahora venimos aquí al Instituto de Participación Ciudadana para desahogar este asunto sobre la presunta denuncia que interpuso la síndica electa Yasmín Arriaga eh por violencia de género, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en este momento aquí en las oficinas del Instituto Estatal de Participación Ciudadana"

*Voz masculina 2: "Claro pues estamos dando respuesta puntual con mi abogado Zamacona a esta **imputación dolosa de parte de la síndica electa Yazmín Arriaga Torres esposa del alcalde Antonio Gaspar Beltrán**, desde mi punto de vista una acusación de violencia de género que no tiene lugar y creo que **a lo que estamos asistiendo es una venganza de juicio político de la llamada pareja, pareja**".*

(...)

*..... lo hace por las críticas que hicimos a su mal gobierno, que para mí y para la sociedad no tengo tanto que demostrar ha sido reprobado por la sociedad de manera contundente por ese mal gobierno, ahorita venimos precisamente de cubrir un plantón, un bloqueo que hay en la ciudad, producto de un alcalde que no atiende las demandas de la sociedad, entonces venimos aquí porque ahora **la señora, su esposa, Yasmín Arriaga Torres quien era miembro del Partido de la Revolución Democrática, antes del PRI, luego del PT y en otro lapso brinca a Morena pues nosotros posteamos información que actores políticos dieron a conocer de la presunta compra de la candidatura para el distrito 2 que al final de cuentas quedó fuera de la jugada por las decisiones internas**".*

*... esas imputaciones dolosas que son una venganza de tipo político porque la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos emitió **una recomendación contra su esposa del alcalde y esto está claro que se trata de una venganza de tipo político..**"*

... pues la señora hubiera aclarado una réplica, pide una réplica de que yo no compré la candidatura, no la compré en 3 millones que diga que no la compró en 3 millones o que diga si la compró en 2 o si le hicieron rebaja y se la dejaron a medio millón, pero eso es una

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

cosa que a mí no me consta, es una cosa que yo transmito porque los actores políticos lo dieron a conocer en muchas conferencias".

... sino la compró la señora que aclaré públicamente, no la compré está equivocado el periodista fulano no somos infalibles, pero si la compró pues entonces ya es un problema de ella, pero lo que sí está claro".

... como lo dije y repito contra mí porque se trata de una venganza política, aquí está mi abogado acompañándome siempre lo ha hecho".

V. ANÁLISIS DE RIESGO

Precisado lo anterior, y previo al análisis de riesgo para determinar la procedencia o no de las medidas de protección solicitadas, cuando una autoridad se encuentra ante una solicitud de órdenes de protección debe:

i) Analizar los riesgos que corre la víctima para poder generar un plan acorde con las necesidades de protección, lo que involucra que, de ser pertinente, se realicen diversas diligencias.

Dependiendo del caso, tomando en cuenta la situación de la parte denunciante y a partir de la urgencia intrínseca de las medidas, es la propia autoridad que recibe la solicitud quien tiene que llevar a cabo tal análisis.

ii) En caso de adoptar las medidas solicitadas, justificar su necesidad y urgencia, esto es, analizar las circunstancias que podrían derivar en un daño grave de difícil reparación a derechos como la vida, la integridad personal y la libertad.

iii) Actuar con una debida diligencia en aras de que la autoridad facultada resuelva lo correspondiente respecto a la adopción de medidas, por lo que el dictado

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

debe ser con prontitud y solo por el tiempo necesario para que la autoridad facultada para ello se pronuncie.

iv) Analizar a qué autoridades estatales debe vincularse para efecto de que coadyuven con este órgano administrativo electoral en los casos en que deba garantizarse de manera preventiva la integridad de las mujeres que dicen ser víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Como se advierte, es necesario diseñar una metodología que se haga cargo de las particularidades derivadas del ejercicio de los derechos político-electorales, y que, a su vez, permita evaluar los riesgos que corre una víctima y, a partir de ello, generar un plan de protección adecuado a fin de que las medidas adoptadas sean eficaces.

Desde luego, esta metodología debe hacerse cargo de la opinión de quien solicita las medidas, lo que no implica trasladarle la responsabilidad de delinearlas, sino atender la problemática acorde a su situación particular, en ese sentido, esta Comisión de Quejas y Denuncias procede a estudiar el riesgo de la cuestión planteada.

En el caso, la quejosa en sus escritos que obran en autos, menciona que se continúan realizando denostaciones a su persona en razón de su género consistentes en una presunta compra de una candidatura a la Diputación del distrito II, así como una supuesta venganza política de la cual aduce ser víctima José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, las cuales a su consideración ponen en riesgo su integridad física, así

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

como la de su familia, al afectarles de manera psicoemocional, ya que las mismas son con el objeto de humillarla.

En ese sentido, y tomando en consideración lo constatado en el acta circunstanciada 114, así como las constancias que obran en autos, de manera preliminar no se advierte afectación alguna a la integridad física de la quejosa ni a la de su familia, ya que no se desprenden hechos que atenten contra la misma, esto es así, ya que de las constancias que obran en autos no se desprende que esté en riesgo o peligro inminente sus vidas, asimismo, no obra amenaza por parte del denunciado o algún otro dato de prueba que haga inferir de forma razonable la posible vulneración a su integridad física.

De esa manera, si bien las declaraciones se encuentran documentadas en autos, y en su caso, sin prejuzgar, pudieran ser contrarias a la ley, las mismas por sí solas no representan un riesgo a la vida o integridad física de la quejosa o a la de su familia que ameriten una atención urgente y preferente, de esa manera su petición de otorgarle medidas de protección resulta ineficaz.

Así, el deber de debida diligencia impone a esta Comisión que, al tener noticia de un acto de violencia, actúe en consecuencia y tome las determinaciones necesarias para que tal violencia cese y, en su caso, no genere daños graves o irreparables a las víctimas y personas posiblemente afectadas por ella; en la especie, **en apariencia de buen derecho y del examen preliminar de los hechos y las constancias del expediente**, se considera que no se actualiza siquiera el supuesto que refiere la actora, es decir, que se encuentre en riesgo su vida, de ahí

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

que, no se justifique la necesidad de dictar las medidas solicitadas por la promovente⁷.

Por las razones expuestas, se declaran **improcedentes** las medidas de protección solicitadas de manera cautelar, lo anterior con independencia de que, será en el momento procesal oportuno que la autoridad jurisdiccional determine la existencia o no de las infracciones atribuidas al denunciado.

Ahora bien, toda vez que, en el presente acuerdo no se decretan medidas de protección a favor de la quejosa, se procede a estudiar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.

VI. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR LA QUEJOSA

La quejosa aduce que las manifestaciones realizadas el quince de junio de la presente anualidad, por el ciudadano José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, han generado un desprestigio a su persona y familia, y las mismas generan un impacto diferenciado, afectándole desproporcionalmente.

⁷ Similar criterio sostuvo la Sala Regional Monterrey del TEPJF al dictar el acuerdo plenario en los expedientes SM-JDC-378/2020 y SM-JDC-311/2020.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Para analizar la procedencia o no de la solicitud realizada por la quejosa, es importante describir que la Sala Superior⁸ ha delineado que las medidas cautelares⁹:

- Constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia.
- Tienen como finalidad constituir un instrumento de protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello evada el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione un valor o principio protegido por el sistema jurídico.
- Tal protección debe dirigirse contra situaciones, hechos, conductas o determinaciones que constituyan una amenaza o afectación real, de manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real,

⁸ En los recursos SUP-REP-152/2017 y SUP-REP-200/2020.

⁹ Ver. **Jurisprudencia 14/2015**, cuyo rubro es: “**MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA**”. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

adecuada y efectiva, a través de medidas que cesen las actividades que causan el daño o prevengan el comportamiento lesivo.

- Los elementos básicos que deben analizarse para la procedencia de las medidas de protección, como instrumento que tiene la finalidad de lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, es evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o que se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

En ese contexto, la Sala Superior ha considerado¹⁰ que, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, el órgano facultado debe:

- Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación.
- El peligro en la demora, o la existencia de causas que justifiquen de manera fundada que, la espera de la resolución definitiva generaría la desaparición de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es irreparable.

¹⁰ Ver las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP-16/2017, SUP-REP-13/2017, SUP-REP-12/2017, SUP-REP-4/2017, entre otros.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

El primer elemento, apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que, **el segundo elemento consiste, en la posible frustración de los derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.**

La situación mencionada obliga, indefectiblemente, a realizar una **evaluación preliminar** en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una **acción ejecutiva, inmediata y eficaz**, que debe adoptarse mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la autoridad, **necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o denegación, en estricta observancia al**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

principio de legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que reúnan los requisitos apuntados, **solo proceden respecto de conductas que se refieran a hechos objetivos y ciertos, no así respecto de aquellos que se hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta**, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Lo anterior encuentra sustento en lo conducente en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.**¹¹

Finalmente, se advierte que la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

En este sentido, la determinación de adoptar o no medidas cautelares responde a parámetros de ponderación diferentes a aquéllos vinculados con el fondo del procedimiento, pues en éstos se analiza no solo la existencia de la conducta o su veracidad, sino también la plena acreditación de la

¹¹ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

infracción, la responsabilidad de los sujetos denunciados y la sanción correspondiente.

Precisada la naturaleza de las medidas cautelares, se procede a verificar el caso concreto a efecto de determinar la procedencia de las medidas solicitadas por la quejosa.

IV. CASO CONCRETO.

A) Marco normativo.

1. Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Artículo 5.

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer.

Artículo II.

Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo III.

Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

***Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.***

Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

- a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; ...*

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

ARTÍCULO 20 Bis

La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

ARTÍCULO 20 Ter

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

- I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;*
- II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;*
- III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;*
- IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;*
- V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;*
- VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;*
- VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;*
- VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;*
- IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;*
- X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla,*

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

- XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;*
- XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;*
- XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;*
- XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;*
- XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;*
- XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;*
- XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;*
- XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;*
- XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;*
- XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;*
- XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o;*

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

XXII. *Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.*

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 442 Bis.

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:

- a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;*
- b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;*
- c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;*
- d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;*
- e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y*
- f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.*

Artículo 474 Bis.

...

9. Las denuncias presentadas ante los Organismos Públicos Locales Electorales, así como procedimientos iniciados de oficio, deberán ser sustanciados en lo conducente, de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo.

**Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de
Guerrero.**

ARTÍCULO 2. *Para los efectos de esta Ley, se entiende por:*

...

XXVI. Violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

ARTÍCULO 405 Bis.

La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:

- a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;*
- b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;*
- c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;*
- d) Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro;*
- e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;*
- f) Cualesquiera otra acción que lesionen o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.*

Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador y serán sancionadas en términos de lo dispuesto en este capítulo según corresponda.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1, 4, primer párrafo, 6, 35, 41 apartado D, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 7 inciso a) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 20 Bis, 20 Ter, 27, 30, 31 y 48 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 2, fracción IV, 4, párrafo primero, 5, 7, párrafo primero, fracciones I, XXIV y XXVI, 10, 18, 61, párrafo 1, fracción II y 120 de la Ley General de Víctimas; 442, inciso f), 442 Bis, 463 Bis y 474 Bis, numeral 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, fracción XXVI y 443 Bis de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero, se concluye que la violencia política contra las mujeres en razón de género, comprende toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Asimismo, se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella, además, cabe señalar que puede manifestarse de cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (psicológica, física, patrimonial, económica, sexual o cualquier otra análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres), la cual puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

Al respecto, resulta ilustrativa, la jurisprudencia 48/2016, de rubro: ***“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”***.

2. Marco respecto de la libertad de expresión en la prensa y debate público.

La **libertad de expresión** es un derecho humano, el cual da a los ciudadanos la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. En el contexto del **debate político**, el ejercicio de esa

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

libertad debe maximizarse (artículos 7 de la Constitución General, 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional y 13 de la Convención Americana ¹²).

Ahora bien, el **derecho a la información** dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión (artículo 6 de la Constitución General).

Los artículos 6º y 7º constitucionales establecen expresamente como limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las siguientes:

- ☐ Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros;
- ☐ Que se provoque algún delito, o
- ☐ Se perturbe el orden público o la paz pública.

En cuanto a **la labor de información y ejercicio del periodismo**, la Sala Superior ha considerado que los canales de periodismo de cualquier naturaleza generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido refieren elementos de naturaleza electoral, con la finalidad de dar a conocer situaciones atinentes a los aspirantes, candidatos o partidos políticos en el marco de un proceso electoral.

¹² Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Al respecto, dicha superioridad ha establecido que **el ejercicio periodístico goza de una protección especial**, de forma que, en principio, todas las expresiones y contenidos emitidos por periódicos y otros medios de comunicación están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, al existir una presunción fuerte respecto a la licitud de su actividad¹³.

En esa medida, **se debe presumir que las publicaciones periodísticas son auténticas y libres, salvo prueba concluyente en contrario**, respecto de su autenticidad, originalidad, gratuidad e imparcialidad.

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, ha sostenido que los **medios de comunicación están amparados por la libertad de expresión** los mensajes que se transmitan en un lenguaje irreverente, poco convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los interlocutores y detonar una deliberación pública¹⁴.

En los mismos términos, ha establecido que un **reportaje neutral** es una manifestación o expresión de información que el medio de comunicación

¹³ Véase la Jurisprudencia 15/2018, de rubro: PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA. De lo dispuesto en los artículos 1º, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. *Pendiente de publicación*.

¹⁴ Tesis: 1a. XLI/2018 (10a.) de rubro: "USO CORRECTO DEL LENGUAJE. EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE PROPICIARLO, VIOLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN" visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

realiza en el que se da cuenta de manera exacta e imparcial de declaraciones o afirmaciones de terceros cuyo contenido sea de interés público, debiéndoseles de eximir de responsabilidad por lo transcrito a pesar de que se haya demostrado que la información difundida es falsa o que se tuvo una temeraria despreocupación por la verdad y su verificación¹⁵.

Lo anterior, en forma alguna significa que **la libertad de expresión o el ejercicio de la función periodista no puedan ser sujetas a algún tipo de restricción**, pero cuando esto ocurra, deberán derivarse de disposiciones establecidas en ley las cuales deberán ser proporcionales y necesarias para la **salvaguarda de los derechos de terceros**, u otros bienes tutelados como la seguridad nacional, el orden y la moral públicas, según se desprende del primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, y 13 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos.

Bajo esa línea argumentativa, en la especie en el acta circunstanciada 114, se constató que el denunciado adujo lo siguiente; *“pues la señora hubiera aclarado una réplica, pide una réplica de que yo no compré la candidatura, no la compré en 3 millones que diga que no la compró en 3 millones o que diga si la compró en 2 o si le hicieron rebaja y se la dejaron a medio millón, pero eso es una cosa que a mí no me consta, es una cosa que yo transmito porque los actores políticos lo dieron a conocer en muchas conferencias”*.

Ahora bien, si bien es cierto que el denunciado refiere que no le constan las manifestaciones a las que hace alusión por haberlas escuchado de diversos “actores políticos”, lo cierto es que a la fecha en que las realizó, es decir el quince

¹⁵ Tesis: 1a. CCCXXII/2018 (10a.) de rubro. “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REPORTAJE NEUTRAL, SU DEFENSA EN CASO DE RESPONSABILIDAD CIVIL” visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

de julio de la presente anualidad, ya se encontraba aprobado el registro de Yasmín Arriaga Torres, por el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo 135/SE/23-04-2021, esto, ya que, a consideración de la autoridad electoral cumplió con los requisitos establecidos en la ley comicial local para poder obtener el registro de su candidatura como Sindica, y el mismo fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página electrónica y los estrados de este Instituto.

En ese sentido, si bien el denunciado adujo que las manifestaciones que vertió el quince de junio de la presente anualidad, no le constaban por haberlas escuchado de diferentes actores políticos, lo es cierto es que, en esa fecha, ya era del conocimiento público el acuerdo 135/SE/23-04-2021, en el cual se aprobaba el registro de Yasmín Arriaga Torres por haber cumplido con los requisitos de ley, ya que fue publicado en diferentes espacios públicos como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página electrónica y los estrados de este Instituto. Por ende, es inverosímil que el denunciado no tuviera conocimiento pleno de la aprobación de la candidatura de la quejosa, por lo que se hace patente que las expresiones vertidas por José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, **no son auténticas y libres, ya que de manera preliminar se advierte prueba en contrario a sus manifestaciones**, respecto de su autenticidad e imparcialidad, ya que al quince julio de la presente anualidad, se puede inferir que conocía de la mencionada aprobación, al ser un medio de comunicación que se encuentra inmerso en la vida pública del Estado, asimismo resulta imparcial ya que si bien menciono lo que los actores políticos refirieron en diversa conferencias acerca de la obtención de la candidatura de la quejosa, no menciono que ya se encontraba aprobada por la autoridad correspondiente, lo que tiene como

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

consecuencia que carezca de los mencionados principios y por ende sus manifestaciones resulten desproporcionales en perjuicio de la quejosa, y generen incertidumbre en el electorado.

2.1. Marco sobre la violencia política de género por parte de la prensa.

En este contexto, podemos sostener que las leyes encaminadas a sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, **válidamente pueden establecer restricciones a la actividad expresiva tanto de los particulares como de los medios de comunicación e incluso de ser el caso, ser fundamento para la imposición de una sanción**, esto, pues dichos ordenamientos buscan un fin constitucionalmente válido consistente en la protección de las mujeres en el ámbito político-electoral y establecer condiciones para que puedan gozar de forma libre y plena sus derechos.

En tal virtud, el órgano jurisdiccional que conozca de actos que se relacionen con la libertad de expresión a través de la labor periodística y la violencia política de género, debe ser analizado de forma estricta a efecto de determinar, si en el caso, **la difusión de los hechos constatados se trata de una mera cuestión descriptiva, o bien, si se realiza un juicio de valor o se da una opinión.**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Esta distinción será necesaria, porque podría servir como base para establecer la existencia de alguna responsabilidad, pues, la labor descriptiva no podría por sí misma ser constitutiva de alguna infracción, pues, únicamente consistiría en la reproducción o difusión de ideas y argumentos de un tercero, mientras que, si se trata de opiniones o juicios de valor, **el autor podría ser directamente imputable por el contenido de la nota.**

Por tanto, **la libertad de expresión en la prensa en materia política tiene un estándar reforzado de protección, sin que se les pueda eximir por completo de responsabilidad en el deber de que en su ejercicio vulneren a través de mensajes estereotipados, el derecho del género femenino a una vida libre de violencia.**

En conclusión, si bien los medios de comunicación están amparados por la libertad de expresión, lo cierto es que deben cumplir con ciertos parámetros para salvaguardar los derechos de terceros u otros bienes tutelados, es decir, la libertad de expresión no protege hechos que pudieran configurar violencia política de género en contra de una mujer.

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y de las candidaturas independientes, así como el fomento de una auténtica cultura

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

democrática, siempre que no se rebasen los límites constitucional y legalmente establecidos.

Ahora bien, precisado el marco jurídico aplicable, en el caso, la presente controversia tiene su origen en las manifestaciones vertidas el quince de junio de la presente anualidad, por el C. José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, en la transmisión de Facebook realizada desde la plataforma del referido medio de comunicación, alojada en el link <https://www.facebook.com/noquenoguerrero/videos/242289184371340/>, del cual mediante acta circunstanciada 114, se constató su contenido, y en lo que interesa, a la literalidad se aprecia lo siguiente:

"Que tal muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta plataforma, informarles que estamos aquí en las oficinas del Instituto de Participación Ciudadana del estado de Guerrero en dónde el director del semanario ¿ No qué no? Comunicación estratégica, José Luis Ramírez Mendoza pues vino a contestar una demanda por violencia de género que interpuso la actual sindica electa Yasmín Arriaga y también la esposa del actual alcalde Antonio Gaspar Beltrán en estos momentos pues se están desahogando aquí este asunto legal, se están presentando las pruebas, las evidencias de este tema que vamos a estar transmitiendo parte de lo que se vive aquí en las oficinas del Instituto Estatal de Participación Ciudadana, cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de aquí de Guerrero hace unos día emitió una resolución en donde ustedes recordarán que había sido denunciado, por el periodista José Luis González Cuevas eh por este tema de extorsión, por un tema dónde había dicho el alcalde que estaba queriendo extorsionar y sin presentar evidencias pues acusó al periodista José Luis González Cuevas; en estos momentos ahora venimos aquí al Instituto de Participación Ciudadana para desahogar este asunto sobre la presunta denuncia que interpuso la síndica electa Yasmín Arriaga eh por violencia de género, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en este momento aquí en las oficinas del Instituto Estatal de Participación Ciudadana"

EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR

Voz masculina 2: "Claro pues estamos dando respuesta puntual con mi abogado Zamacona a esta imputación dolosa de parte de la síndica electa Yasmín Arriaga Torres, esposa del alcalde Antonio Gaspar Beltrán, desde mi punto de vista una acusación de violencia de género que no tiene lugar y creo que a lo que estamos asistiendo es una venganza de juicio político de la llamada pareja, pareja".

(...)

..... lo hace por las críticas que hicimos a su mal gobierno, que para mí y para la sociedad no tengo tanto que demostrar ha sido reprobado por la sociedad de manera contundente por ese mal gobierno, ahorita venimos precisamente de cubrir un plantón, un bloqueo que hay en la ciudad, producto de un alcalde que no atiende las demandas de la sociedad, entonces venimos aquí porque ahora la señora, su esposa, Yasmín Arriaga Torres, quien era miembro del Partido de la Revolución Democrática, antes del PRI, luego del PT y en otro lapso brinca a Morena pues nosotros posteamos información que actores políticos dieron a conocer de la presunta compra de la candidatura para el distrito 2 que al final de cuentas quedó fuera de la jugada por las decisiones internas".

... esas imputaciones dolosas que son una venganza de tipo político porque la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos emitió una recomendación contra su esposa del alcalde y esto está claro que se trata de una venganza de tipo político..."

... pues la señora hubiera aclarado una réplica, pide una réplica de que yo no compré la candidatura, no la compré en 3 millones que diga que no la compró en 3 millones o que diga si la compró en 2 o si le hicieron rebaja y se la dejaron a medio millón, pero eso es una cosa que a mí no me consta es una cosa que yo transmito porque los actores políticos lo dieron a conocer en muchas conferencias".

... sino la compró la señora que aclaré públicamente, no la compró está equivocado el periodista fulano no somos infalibles, pero si la compró pues entonces ya es un problema de ella, pero lo que sí está claro".

... como lo dije y repito contra mí porque se trata de una venganza política, aquí está mi abogado acompañándome siempre lo ha hecho".

De lo anterior se desprende de manera destacada que el C. José Luis González Cuevas, editor y director del semanario *¿No qué no?*, comunicación estratégica, refiere que la denuncia radicada en el expediente IEPC/CCE/PES/033/2021, del índice de la Coordinación de lo Contencioso de este Instituto, es motivo de una "venganza política" en su contra, derivado de

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

la recomendación realizada a Antonio Gaspar Beltrán, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el expediente CDHEG-VG-I-050/2020-II, ya que a su consideración el hecho de que la quejosa sea esposa del mencionado edil (hecho que la quejosa afirma ya no acontece), lo hace inferir que la denuncia por violencia política de género interpuesta en su contra, es motivo de tal situación.

Asimismo, de manera preliminar del análisis integral a lo constatado en el acta circunstanciada 114, se advierte que José Luis González Cuevas editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, al hacer referencia a la quejosa, hace a alusión destacadamente a expresiones como; ***“la señora su esposa” “de la llamada pareja, pareja”***, es decir trata de hacer notar el vínculo matrimonial o relación de la denunciante con el C. Antonio Gaspar Beltrán.

En este contexto, si bien pudiera, en principio, enmarcarse en una crítica fuerte dentro del debate político, lo cierto es que bajo la apariencia del buen derecho y de manera preliminar, se advierte que, las expresiones constatadas en el acta circunstanciada 114, están dirigidas a menoscabar a la denunciante en su entonces carácter de candidata a un cargo de elección popular (sindica), con motivo del vínculo matrimonial que tenía con el actual Presidente del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, ya que a consideración del denunciado la supuesta ***“venganza política” del cual fue***

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

objeto, se realizó a través de la esposa del C. Antonio Gaspar Beltrán, es decir, la quejosa.

Así, bajo la apariencia del buen derecho y de manera preliminar, manifestaciones como; “esta **imputación dolosa de parte de la síndica electa Yasmín Arriaga Torres, esposa del alcalde Antonio Gaspar Beltrán, desde mi punto de vista una acusación de violencia de género que no tiene lugar y creo que a lo que estamos asistiendo es una venganza de juicio político de la llamada pareja, pareja**”, **de una interpretación preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se intenta mostrar** a una mujer que actúa en subordinación a su pareja, es decir, sin toma de decisión, dependiente de un vínculo matrimonial, pues con tal afirmación, implica desconocerla no solo como persona sino como una candidata capaz de tomar decisiones en la vida política, lo que reproduce un *estereotipo negativo basado en el género*, una desigualdad de poder que responde a una generalizada situación de supra a subordinación entre hombres y mujeres.

Ello se entiende de esa manera al considerar que, por muchos años la sociedad aceptó que, el rol de la mujer en el matrimonio era de sumisión y obediencia al cónyuge, por tanto, en el caso, se muestra que la función de la mujer es la de ser un medio para cumplir un fin presuntamente ilícito en favor de su pareja, y considerando la entonces calidad de candidata de la quejosa a un cargo de elección popular, implícitamente hace notar que quien tomará las decisiones para desarrollar las actividades del cargo al que aspiraba sería su esposo, lo que bajo la apariencia del buen derecho, se puede llegar a

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

traducir en *violencia simbólica* en contra de la candidata, porque se le niega su individualidad y personalidad propia, lo cual escapa de la finalidad para la que está prevista la libertad de expresión.

En este sentido, de un análisis preliminar a los hechos materia del presente procedimiento y bajo la apariencia del buen derecho, es posible advertir que su contenido y alcance denotan el uso de un lenguaje discriminatorio que no podría enmarcarse al amparo de la libertad de expresión. Pues la condición de que la quejosa en su entonces carácter de candidata aun cargo de elección, sea señalada por un acto propio (presentación de denuncia), relacionado supuestamente por el hecho de haber sido esposa del presidente del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, dan la noción de que se niega a la candidata su individualidad, personalidad y autonomía para tomar decisiones. Reforzándose con ello el estereotipo de que la mujer dentro del matrimonio tiene el deber de obediencia hacia su cónyuge; así como, que las mujeres que tiene relaciones afectivas con personajes políticos carecen de decisión al tomar acciones, por ende, se cuestiona la confiabilidad de su capacidad.

Ahora bien, bajo esa línea de pensamiento, es importante puntualizar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 21/2018, de rubro: ***“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”***, estableció los elementos necesarios para identificar cuando se

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

está en presencia de algún acto o conducta que pudiera constituir violencia política en contra de una mujer por razón de género; a saber:

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;
2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;
3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;
4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y
5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Ahora bien, a partir de los elementos antes mencionados, aplicados al caso bajo estudio, se concluye, **de manera preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto**, lo siguiente:

1. ¿Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público?

Sí ya que las manifestaciones constatadas en el acta circunstanciada 114, se dirigen a la quejosa en su calidad de Sindica electa del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

2. ¿Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas?

Sí, fue perpetrado por un particular esto es, el C. José Luis González Cuevas editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, en su calidad de persona moral y medio de comunicación, a través de su plataforma electrónica.

3. ¿Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico?

Sí, es simbólico ya que las expresiones denunciadas hacen alusión a la vida privada de la denunciante, es decir, a sus relaciones afectivas, derivado de su matrimonio con el C. Antonio Gaspar Beltrán, aspecto que le propicia un demérito en razón de su género.

4. ¿Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres?

Sí, ya que las expresiones, tuvieron como pretensión hacer ver que las decisiones de la denunciante están supeditadas a la subordinación de su cónyuge, lo cual le resta reconocimiento a sus capacidades para desarrollar alguna función.

5. ¿Se basa en elementos de género?

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Sí, ya que las manifestaciones se puede inferir un impacto diferenciado en contra de la mujer, ya que, si el personaje fuera un hombre, el mensaje no tendría el mismo impacto, que es mostrar a las mujeres como dependientes y subordinadas hacia su cónyuge y, por ende, sin capacidad para ser candidata a un cargo de elección popular y ejercer el cargo por sí sola.

Como se advierte, la violencia política que la quejosa refiere estar padeciendo, está relacionada con manifestaciones que tienen que ver con su vida privada, las cuales son derivadas de su vínculo matrimonial, es decir, de las relaciones afectivas de la denunciante, en ese tenor, a fin de contrarrestar dichos efectos perniciosos este órgano de decisión colegiada estima que deben adoptarse medidas cautelares que hagan cesar de inmediato tales conductas.

Por ende, con el objeto evitar el menoscabo y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadana Yasmín Arriaga Torres, en tanto se resuelve la materia de fondo en este procedimiento, se decretan las siguientes medidas cautelares bajo la figura de la tutela preventiva:

- Se ordena a José Luis González Cuevas, en su carácter de editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, suprima las expresiones relativas al vínculo matrimonial de Yasmín Arriaga Torres con Antonio Gaspar Beltrán, que realizó en el video publicado en su plataforma electrónica, alojado en el link de internet

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

<https://www.facebook.com/noquenoguerrero/videos/242289184371340/>.

- Se conmina a José Luis González Cuevas, en su carácter de editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, a que en lo sucesivo al momento de realizar una opinión periodística, se abstenga de realizar expresiones que hagan alusión a las relaciones afectivas de Yasmín Arriaga Torres, que quieran hacer notar alguna subordinación de ella a determinada persona, es decir, que no reconozca su individualidad y personalidad propia como actora política, así como, evitar cualquier manifestación que implique violencia física, simbólica, psicológica, propiciando un ambiente de respeto.

En virtud de lo anterior, el C. José Luis González Cuevas, en su carácter de editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se encuentre legalmente notificado, deberá de informar a este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, las providencias o determinaciones que haya asumido para el cumplimiento de este acuerdo, remitiendo las constancias que así lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo estrictamente otorgado para ello, **se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 68 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, así como en el diverso 37 de la ley 456 del Sistema de Medios de**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, consistente en una amonestación pública.

Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis XIV/2015 y en la Jurisprudencia 10/2018, respectivamente, de rubros: ***“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD DE REQUERIR INFORMACIÓN HASTA EN DOS OCASIONES, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD, EFICACIA Y EXPEDITEZ EN LA INVESTIGACIÓN.”*** y ***“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.”***

No pasa inadvertido para esta Comisión de Quejas y Denuncias, que en la valoración con fines de protección cautelar se debe analizar de forma particular el riesgo de afectación grave o sustancial, o si existe un interés superior a salvaguardar que deba privilegiarse.

En ese tenor, en un estudio preliminar de los hechos denunciados, bajo la apariencia del buen derecho, se considera que los mismos exceden los límites de la libertad de expresión, debido a que se critica con un hecho que se desea erradicar de nuestra sociedad, como es la violencia en contra de las mujeres, en cualquier de sus formas o expresiones, pues las leyes encaminadas a sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, **válidamente pueden establecer restricciones a la actividad**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

expresiva tanto de los particulares como de los medios de comunicación e incluso de ser el caso, ser fundamento para la imposición de una sanción, esto, pues dichos ordenamientos buscan un fin constitucionalmente válido consistente en la protección de las mujeres en el ámbito político-electoral y establecer condiciones para que puedan gozar de forma libre y plena sus derechos.

Aunado a que en sede cautelar, se advierte la existencia de elementos suficientes para considerar que existe un impacto diferenciado en contra de la mujer, ya que, si el personaje fuera un hombre, el mensaje no tendría el mismo impacto, que es mostrar a las mujeres como dependientes y subordinadas hacia su cónyuge y, por ende, sin capacidad para ser candidata a un cargo de elección popular y ejercer el cargo por sí sola y mostrara una dependencia de la mujer hacia su esposo y su inferioridad frente al mismo.

Similar criterio sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-252/2018.

Por último, es conveniente precisar que la procedencia de las medidas cautelares no prejuzga respecto a la existencia o no de las infracciones denunciadas, dado que dicho pronunciamiento corresponderá realizarlo de forma exclusiva al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el cual, al dictar la resolución de fondo en este asunto.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Hágase del conocimiento la presente determinación a la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, en cumplimiento al acuerdo plenario de uno de julio de la presente anualidad, dictado en el expediente SCM-JDC-1686/2021.

En mérito de lo previamente expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 435, segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 75, 80 fracción II y III del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la Comisión de Quejas y Denuncias:

A C U E R D A

PRIMERO. Es improcedente la solicitud de medidas de protección formulada por la C. Yasmín Arriaga Torres, en términos de los argumentos esgrimidos en el presente acuerdo.

SEGUNDO. Es procedente la solicitud de medidas cautelares formulada por Yasmín Arriaga Torres, en términos de los argumentos esgrimidos en el presente acuerdo.

TERCERO. Notifíquese este acuerdo **personalmente**, a la ciudadana Yasmín Arriaga Torres, y a José Luis González Cuevas, en su carácter de editor y director del semanario *¿No qué no?, comunicación estratégica*; por **oficio** a la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, y **por estrados**, al público en general, de conformidad con lo establecido en el artículo 445 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 65 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/088/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

El presente acuerdo fue aprobado por **unanimidad** de votos de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Séptima Sesión Ordinaria de trabajo, celebrada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno.

**LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.**

**C. VICENTA MOLINA REVUELTA
CONSEJERA PRESIDENTA**

**C. AMADEO GUERRERO ONOFRE
CONSEJERO ELECTORAL**

**C. EDMAR LEÓN GARCÍA
CONSEJERO ELECTORAL**

**C. AZUCENA ABARCA VILLAGÓMEZ
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN.**